Texto Sentencia Tribunal de Primera Instancia:

Antofagasta, cuatro de noviembre del dos mil ocho.

Vistos oído y teniendo presente:

Primero: Que comparece don Orlando Antonio Contreras Valencia, cédula de identidad N° 06.123.804–2, técnico paramédico, con domicilio en calle José Miguel Carrera N° 4521, Villa Huaytiquina, Calama; quien presenta demanda unilateralmente de divorcio por cese de convivencia en contra de Hermelinda Amalia Garrido Vilche, cédula de identidad N° 07.091.986–9, dueña de casa, domiciliada en calle Esmeralda N° 2450, Antofagasta; solicitando que se declare el divorcio, según el inciso 3° del artículo 55 de la Ley 19.947, al haber cesado su convivencia por más de tres años, señalando que se contrajeron matrimonio el siete de junio de mil novecientos setenta y tres, pero que se encuentran separados de hecho desde el mes de septiembre de 1998 y que no hay ninguna posibilidad de reconciliación.

Agrega que de la relación matrimonial, nació una hija, mayor de edad.

Segundo: Que con fecha dos de junio del dos mil ocho, se llevó a cabo audiencia especial de conciliación especial del artículo 67 de la Ley de Matrimonio Civil respecto a mantener el vínculo matrimonial que los une indicaron que no desean continuar casados.

Respecto de las Relaciones mutuas, las partes expusieron que:

La demandada percibe una pensión de alimentos equivalente al quince por ciento (15%) del total de los emolumentos del demandado.

La hija matrimonial es mayor de edad, por lo que no procede, regular materia alguna. Existen bienes sociales, pero no hay acuerdos al respecto.

El demandante renuncia a la compensación económica y la demandada refiere que demandada su derecho.

Tercero: Que en la audiencia preparatoria efectuada el dos de junio del dos mil ocho, el demandante ratificó su demanda de divorcio y la demandada se allanó.

Y en el acto, la demandada deduce demanda reconvencional de compensación económica, solicitando se condene al actor a cancelar una suma de \$50.000.000.– por haberse dedicado al cuidado de la hija en común, durante la convivencia.

La demandada reconvencional, solicita el rechazo de la acción, en atención que la demandante reconvencional habría hecho abandono del hogar y su parte habría

asumido los cuidados de la hija en común.

A continuación, se fijó el objeto del juicio, determinar la procedencia de la acción de divorcio y compensación económica, los hechos a probar. Y las partes ofrecieron sus medios de prueba.

Se excluye prueba ofrecida por la demandada principal, relativa a Inventario de bienes sociales, por estimarse irrelevante en el presente proceso, donde no se discute la liquidación de la sociedad conyugal.

Cuarto: Que con fecha nueve y veintidós de octubre del presente año, se lleva a efecto audiencia de juicio, la cual contó con la asistencia de ambas partes y sus apoderados; recibándose la prueba que a continuación se detalla y analiza.

Quinto: Que las partes en el proceso rindieron los siguientes medios probatorios:

La demandante principal:

Documental: Fueron incorporados mediante su lectura resumida y previa autorización de los solicitantes, los siguientes documentos:

1. Certificado de matrimonio celebrado entre las partes del proceso.
2. Certificado de nacimiento de la hija matrimonial de las partes, doña Kissy Lorena Contreras Garrido.
3. Copia de la sentencia definitiva dictada en causa sobre alimentos mayores, Rol Nº 32.576, del 2º Juzgado de Letras de Calama.
4. Tres últimas liquidaciones de remuneraciones del demandante, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de 2008.
5. Certificado de residencia del demandante, emitido por Carabineros de Chile.
6. Certificado de egreso de la carrera de Ingeniería química de la hija de las partes.

Testimonial: Previa verificación de su asistencia con su respectiva cédula de identidad, habiéndole tomado el juramento de rigor antes de que declarase y advertido sobre su obligación de ser veraz, se oyó la siguiente declaración del testigo:

1. Kissy Lorena Contreras Garrido, cédula de identidad Nº 14.108.848-3, quien refiere ser hijas de las partes, que fue su padre quien se dedicó a sus cuidados, tanto durante la convivencia del matrimonio como después de la separación en atención a que su madre presentaba reiterados viajes fuera de la ciudad por sus enfermedades psicológicas y luego habría abandonado el hogar común; que sus

padres se separaron en el año 1998 y nunca reanudaron su vida en común.

2. Karina Elizabeth Peñalosa Espinoza, cédula de identidad N° 15.334.974-6, refiere conocer a las partes en el proceso por ser amiga de la hija matrimonial de éstos, que las partes se separaron en el año 1998 y nunca han reanudado su vida en común. Por otro lado, refiere que conoce a la madre de doña Kissy por cuanto durante el período de universidad la última vivía en la casa de una tía y su madre vivía cerca de ellos.

Declaración de Parte: Que se escuchó la declaración de parte de la demandada principal, doña Hermelinda Amalia Garrido Vilche, quien declara que la separación de su cónyuge se produjo el seis de septiembre de 1998, a consecuencia de problemas de salud que le impedían vivir en Chuquicamata por su altura; que la hija matrimonial se quedó bajo los cuidados del padre porque éste contaba con ingresos, que contribuyó a la crianza de su hija con buenos consejos, pero no económicamente; estuvo casada por veinticinco años y nunca trabajó y finalmente señala que estudió un año de química y farmacéutica en la universidad Católica del Norte.

La demandada principal:

Documental: Fueron incorporados mediante su lectura resumida y previa autorización de los solicitantes, los siguientes documentos:

1. Copia de Certificado médico otorgado por el Doctor Héctor Espinoza Correa, que da cuenta de Síndrome de Apneas Obstructivas del Sueño, diagnosticado a la demandada principal, de fecha 12 de septiembre del dos mil dos.
2. Copia de Certificado médico otorgado por el Doctor Eduardo Vergara, que da cuenta de diagnóstico por HTA severa, es decir, hipertensión severa, sin data de emisión.
3. Copia de Informe de ingreso de paciente en la Clínica Antofagasta en UCI, relativo a la demandada principal, de fecha once de junio del dos mil dos.
4. Copia de Certificado Médico remitido por el doctor Guillermo Elanes Brochet, respecto a los medicamentos utilizados por la demandada, de fecha dieciocho de diciembre del dos mil siete.
5. Dos Copias de Certificados otorgados por la doctora Erika Quiroz Peireti respecto de la demandada, relativo a diagnósticos presentados por la demandada, con fecha diez de marzo del dos mil cuatro.
6. Copia de Certificado otorgados por la doctora Erika Quiroz Peireti respecto de la demandada, relativo a diagnósticos presentados por la demandada, con fecha nueve de marzo del dos mil cuatro.

7. Copia de Certificado Médico otorgado por la doctora Marisol Yáñez Astudillo respecto de la demandada, que da cuenta de diagnósticos por hipertensión arterial crónica, apnea de sueño severa en tratamiento, climaterio postmenopausico, hiperinsulinemia con resistencia a la insulina, hipotiroidismo, esteatosis hepática, hiperuricemia y obesidad moderada, de fecha 26 de febrero del dos mil cuatro.

8. Copia de Informe practicado por el laboratorio Luis Pasteur Ltda. respecto de exámenes de la demandada practicado por el Tecnólogo Medico Aurelio Jiménez Ponce, de fecha diecisiete de abril del dos mil seis.

9. Copia de Certificado del Dr. Juan García Carrasco respecto de la demandada, con diagnóstico de hipertensión arterial severa y cardiopatía hipertensiva, de fecha diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

10. Copia de Electrocardiograma efectuada por el Dr. Carlos Flores respecto de la demandada, de fecha diecinueve de mayo del dos mil cuatro.

Testimonial: Previa verificación de su asistencia con su respectiva cédula de identidad, habiéndole tomado el juramentó de rigor antes de que declarase y advertido sobre su obligación de ser veraz, se oyó la declaración del testigo don Eduardo Castellón Pardo, cédula de identidad N° 04.023.992-8, quien expone que la demandada principal vive en su domicilio desde hace siete años por cuanto no cuenta con vivienda alguna, que ésta no tiene previsión social, ni atención médica, por lo que se encuentra desvalida; por otro lado, no tiene posibilidad de acceso al campo laboral atendida su hipertensión.

Declaración de Parte: Que se escuchó en estrado la declaración del demandante, don Orlando Antonio Contreras Valencia, quien refiere que contrajo matrimonio en 1973 con la demandada principal, separándose en 1997, que la demandada retiró todos los bienes muebles del domicilio, que conoció a la demandante cuando tenía 16 años y ella no estudiaba; que Codelco le otorga tratamiento médico integral, aunque en la actualidad atendida problemáticas generadas por su cónyuge los beneficios médicos, le son otorgados sólo en la ciudad de Calama.

Se .tiene la vista causa Rol N° 32.576 del Segundo Juzgado de Letras de Calama, caratulados "Garrido Vilche, Hermelinda Andrea con Contreras Valencia, Orlando Antonio", sobre Alimentos Mayores.

Finalmente, se escuchó la opinión de la Consejero Técnico del Tribunal, doña Cecilia Martínez.

I. En cuanto a la acción de divorcio unilateral.

Sexto: Que los medios de prueba reseñados, recibidos personalmente por esta sentenciadora en la audiencia de juicio y que consistieron en los documentos incorporados al juicio mediante su lectura, especialmente, el certificado de matrimonio celebrado entre los solicitantes, en concordancia con la testimonial, son contestes en el hecho que los cónyuges llevan más de tres años separados

sin haberse reconciliado nunca; permiten tener por acreditado, conforme las reglas de la sana crítica, esto es, sin contravenir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, el hecho que los cónyuges solicitantes contrajeron matrimonio civil el día siete de junio de mil novecientos setenta y tres; que su vida en común ha cesado durante un lapso mucho mayor de tres años y que, en ese tiempo, no han reanudado su convivencia con ánimo de permanencia, habiéndose separado en el año 1998.

Séptimo: Que la actual Ley de Matrimonio Civil N° 19.947 contempla en su artículo 55 una causal de divorcio objetiva que permite al juez decretar el divorcio de los cónyuges, si acreditan que han cesado su convivencia por más de tres años, sin reanudarla con ánimo de permanencia, como una de las formas de estabilizar las separaciones de hecho de cónyuges que dejan de cohabitar y no reanudan su vida en común, vale decir, de las separaciones de facto que se hacen permanentes a través del tiempo, derogando así en forma tácita la característica de la indisolubilidad del matrimonio civil de que trata el artículo 102 de nuestro Código Civil. Por lo anterior y, verificado el cumplimiento de la causal objetiva de divorcio de cese de la convivencia por más de tres años, sin que medie reconciliación entre los cónyuges con ánimo de permanencia, procede decretar el divorcio y dar por terminado el matrimonio solicitado unilateralmente por cese de convivencia.

II.– En cuanto a la acción de compensación económica.

Octavo: Que el artículo 61 de la Ley 19.947 señala que para alegar un menoscabo económico el cónyuge que la solicita debe:

a) Haberse dedicado al cuidado de los hijos o a las labores propias del hogar.

b) Que como consecuencia de lo anterior, ese mismo cónyuge no pudo desarrollar una actividad remunerada o lucrativa durante el matrimonio, o lo hizo en menor medida de lo que podía y quería.

Noveno: Que de los antecedentes allegados al proceso, en especial, las declaraciones prestadas por los testigos de la demandante principal, en especial doña Kissy Contreras Garrido, hija de las partes; como de la declaración de parte efectuada por la demandada principal, doña Hermelinda Garrido Vilche y de la sentencia emitida por el Segundo Juzgado de Letras de Calma, en Causa Rol N° 3.2.576, se concluye que si bien es cierto, la demandada principal en algún momento de la convivencia asumió los cuidados personales de la hija matrimonial, dicha función en forma mayoritaria fue asumida por el demandante principal.

Es así como, se encuentra acreditado, tanto por la testimonial de la demandante principal, como por el proceso tenido a la vista que; fue el demandante principal quien asumió los cuidados personales de la hija matrimonial, tanto durante la convivencia y a consecuencia de los constantes y prolongados viajes de la madre. Como con posterioridad, luego de la separación de hecho de las partes.

Por otro lado, y respecto de la demandante reconvenicional, no ha acreditado en autos que se haya dedicado a los cuidados de su hija, desde que nada dijo su testigo al respecto. Contrario a lo expuesto por las dos testigos de la demandada reconvenicional.

Y tampoco se encuentra acreditado en autos que ésta en momento alguno haya mostrado o tenido intención de trabajar y que no lo pudo hacer por encontrarse al cuidado de su hija o del hogar común.

Finalmente, la documental acompañada en autos por la demandante reconvenicional, sólo dan cuenta de los diagnósticos de enfermedades que presentaba ésta durante el año 2004. Donde no se encuentra acreditado que dichas enfermedades impidan el desarrollo de actividades remuneradas y, por otro lado, tampoco se puede concluir que dichas dolencias fueron generadas a consecuencia de los cuidados de los hijos o el hogar común.

Atendido a lo cual, a juicio de esta sentenciadora, no acreditó la existencia de los supuestos previstos por el artículo 61 de la Ley de Matrimonio Civil, para efectos de otorgar compensación económica, por lo que se desechará dicha acción.

Décimo: Que la demás prueba rendida en este juicio en nada altera la convicción alcanzada por este sentenciador.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 21, 42 N° 4, 55, 56, 59, 61, 67, 68 y 92 de la Ley de Matrimonio Civil; artículos 8° N° 16, 10, 12, 16, 32, 55 y siguientes, todos de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia y 24 de la ley 4.808, Se Resuelve:

I. En cuanto a la acción de divorcio.

Que Se Acoge la demanda principal de divorcio unilateral del matrimonio de don Orlando Antonio Contreras Valencia, cédula de identidad N° 06.123.804-2 y doña Hermelinda Amalia Garrido Vilches, cédula de identidad N° 07.091.986-9, ya debidamente individualizados en autos, celebrado por ellos el día siete de junio de mil novecientos setenta y tres, inscrito bajo el N° 111 del Registro de Matrimonio de ese mismo año, del Servicio de Registro Civil e Identificación de la Circunscripción de Chuquicamata, quienes, una vez efectuada la subinscripción de la sentencia ejecutoriada de divorcio al margen de la inscripción matrimonial, adquirirán el estado civil de divorciados y podrán volver a contraer matrimonio.

II. Se declara terminada la sociedad conyugal, no siendo posible su liquidación por no haber sido solicitado por las partes.

El Oficial Civil del Servicio de Registro Civil e Identificación de la Circunscripción correspondiente, practicará la subinscripción de la presente sentencia, ejecutoriada que ella sea, al margen de la inscripción matrimonial señalada en el punto I. de esta parte resolutive;

III. En cuanto a la acción de compensación económica.

Que Se Rechaza la acción reconvencional de compensación económica por no haberse acreditado la concurrencia de sus requisitos legales.

IV. Que no habrá condena en costas por haber tenido las partes motivo plausible para litigar.

Anótese, regístrese, notifíquese personalmente a la parte que concurra a la audiencia de lectura de sentencia, dése copia a quien verbalmente lo solicite y archívese ejecutoriada que se encuentre la presente resolución.

Dictada por doña Katherine González Butcher, Juez Titular de Familia de Antofagasta.

RUC 07-2-0351021-1

RIT C-2772-2007. Corte de Apelaciones de Antofagasta, 07/07/2009, 2-2009

Texto Sentencia Corte de Apelaciones :

Antofagasta, siete de julio de dos mil nueve.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de los considerandos noveno y décimo, que se eliminan y, en su lugar, se tiene además presente:

Primero: Que es de aceptación general tanto en la jurisprudencia como en la doctrina lo estatuido en el artículo 1698 del Código Civil, en cuanto debe probar las obligaciones el que las alega y su extinción quien la reclama, pero este principio nemine discrepante requiere, a la luz de las reglas de la sana crítica, el análisis lógico y de experiencia frente al reclamo que hace la cónyuge sobre el derecho a la compensación económica por el detrimento ínsito que se ha producido en el desarrollo de su vida, como consecuencia de haberse dedicado al cuidado de los Hijos o a las labores propias del hogar común. Interesa entonces reflexionar acerca de la naturaleza o el origen de esta obligación, no precisando un razonamiento muy profundo para comprender que surge del cuidado y crianza de la hija, así como la dedicación puesta en las labores inherentes a estar a cargo del hogar común.

Segundo: Que por consiguiente, debe reflexionarse sobre la base de la lógica y la experiencia, el significado o contenido del cuidado de su hija y las labores propias

del hogar común, que en términos sociales siempre ha sido ignorado, sin entregarle el lugar que corresponde dentro de la actividad humana; más aún en países subdesarrollados cuyas funciones propias de crianza y cuidado de los hijos se supe y se disemina en distintas personas como vecinos, familiares cercanos, normalmente abuelos, a veces empleados domésticos o trabajadores de casa particular; por lo tanto, la apreciación exacta de esta idea se ve obnubilada frente a la mujer que se hace responsable en la crianza y labores propias del hogar común. En consecuencia, probado que sea el hecho de la crianza y establecimiento, o la dedicación a las labores del hogar, surge indefectiblemente la consecuencia del deterioro en el desarrollo del individuo, porque se ha impedido real o materialmente una actividad destinada al enriquecimiento personal para obtener conocimientos o destrezas que permitan, por ejemplo oportunidades más beneficiosas o un desenvolvimiento independiente, por tanto, el deterioro adviene de todas maneras en la medida, que el dedicarse a trabajar y criar a su hija hasta que ésta tuvo diecisiete años, y a las labores del hogar común no le ha permitido brindarse enriquecimiento personal, sea continuando sus estudios, perfeccionándose, fortaleciendo su capacidad intelectual que le permitiría un trabajo remunerado, beneficios previsionales, más aún si se trata de una mujer que contrajo matrimonio a los dieciocho años de edad y desde esa fecha comenzó a criar a su hija Kissy Lorena Contreras Garrido, nacida el 24 de febrero de 1981, lo que significa que por veinticinco años debió dedicarse a realizar labores propias del hogar y una actividad de crianza y responsabilidad, lo que indiscutiblemente le ha producido un deterioro en su desarrollo personal que requiere ser indemnizado en una suma de dinero.

En conclusión, de acuerdo al razonamiento efectuado, probada la existencia de la hija en común, es evidente e indiscutible el deterioro personal y el desgaste de la madre.

Tercero: Que en virtud del artículo 1698 del Código Civil y habiéndose acreditado que la demandante reconvenional Hermelinda Amalia Garrido Vilches crió una hija en la forma señalada precedentemente, es posible concluir lógicamente con los datos que entrega la experiencia, que inevitablemente ha existido un menoscabo en el desarrollo individual de ella que necesariamente debe ser compensado económicamente, según lo dispone el artículo 61 de la Ley de Matrimonio Civil y, en tal sentido, teniendo presente la realidad socio-económica de las familias, la pensión alimenticia que se logró obtener mediante sentencia de 16 de diciembre de 1999, agregada a los autos, se estima de justicia que la suma equivalente a sesenta ingresos mínimos mensuales se corresponde como indemnizatoria o compensatoria de la actividad realizada.

Cuarto: Que sin perjuicio de lo indicado precedentemente, para establecer el origen de la indemnización destinada a compensar económicamente el deterioro que ha sufrido la mujer, debe tenerse presente que no constituye un hecho discutido en la causa la circunstancia de que ella crió a su hija los primeros diecisiete años y que para el desarrollo y formación de ella, debió dedicarse exclusivamente a su cuidado y a las labores propias del hogar común desde los

dieciocho años, edad en que contrajo matrimonio, lo que implica un menoscabo físico e intelectual para avanzar laboralmente, desarrollarse en forma tanto profesional como personal, impidiendo además su capacidad de ahorro previsional; situación que previo el legislador en el artículo 61 ya referido. Además, no influye en la procedencia y determinación de este monto lo expuesto por su hija, en cuanto declara que los cuidados personales los asumió mayoritariamente su padre. Esta convicción se obtiene porque en el hecho, el padre trabajaba y no podía ser otra persona que su madre quien estaba permanentemente en casa a cargo de su cuidado. Asimismo, las enfermedades que habría padecido la cónyuge demandante reconvenzional, invocadas por el actor, no son demostrativas de impedimento permanente o invalidante, sino reflejan los padecimientos normales que puede experimentar una familia y que exigen la comprensión de los integrantes de la misma para su tratamiento, aunque éste implique ausentarse esporádicamente del hogar.

Sin perjuicio de lo anterior, debe tenerse presente que la hija hoy goza de una profesión y ha obtenido un lugar en la sociedad gracias a la formación y educación que durante sus primeros años de vida le brindó su madre.

Quinto: Que habiéndose fijado la compensación en sesenta ingresos mínimos mensuales incrementados para los efectos remuneracionales, el pago de dicha suma deberá efectuarse por mensualidades pagaderas los cinco primeros días de cada mes, a razón de un ingreso mínimo mensual incrementado durante sesenta meses sucesivos a partir del mes siguiente de la fecha en que quede ejecutoriada esta sentencia.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en la Ley 19.947 y en los artículos 174, 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se revoca sin costas la sentencia dictada por la Juez de Familia de esta ciudad Katherine González Butcher, con fecha cuatro de noviembre de dos mil ocho, sólo en la parte que rechazó la demanda de compensación económica y, en su lugar, se declara que, se accede a la misma, debiendo pagar el cónyuge Orlando Antonio Contreras Valencia a la demandada y demandante reconvenzional Hermelinda Amalia Garrido Vilche, la suma equivalente a sesenta ingresos mínimos mensuales incrementados para efecto remuneracionales, a razón de un ingreso mínimo mensual, en sesenta cuotas mensuales y sucesivas, pagaderas los cinco primeros días de cada mes, a partir del mes siguiente de la fecha en que quede ejecutoriada esta sentencia.

Regístrese y devuélvase los antecedentes.

Redacción del Ministro Titular, Sr. Osear Clavería Guzmán.

Pronunciado por la Primera Sala integrada por los Ministros Sra. Virginia Soublette Miranda, Sr. Oscar Clavería Guzmán y la Abogada Integrante Srta. Marcia Ramos Robles. Autoriza la Secretaria Titular Sra. Claudia Campusano Reinike.

En Antofagasta, a siete de julio de dos mil nueve, notifiqué por estado diario la resolución que antecede.

Rol N° 2–2009. Corte Suprema, 07/09/2009, 5706-2009

Texto Sentencia Corte Suprema:

Santiago, siete de septiembre de dos mil nueve.

Vistos:

En estos autos RIT C–2772–2007, RUC N° 07–2–0351021–1 del Juzgado de Familia de Antofagasta, en causa por divorcio, doña Hermelinda Amalia Garrido Vilche, deduce demanda reconvenicional en contra de don Orlando Antonio Contreras Valencia, para sea condenado al pago de la suma de \$50.000.000 a que está obligado por el menoscabo económico sufrido a causa del matrimonio que los unió, con costas.

Contestando el libelo, el demandado reconvenicional solicita el rechazo de la acción en atención a que la demandante reconvenicional abandonó el hogar y nunca asumió el cuidado de la hija de ambos.

El tribunal de primera instancia, en sentencia de cuatro de noviembre de dos mil ocho, que se lee en la carpeta virtual, declarando el divorcio, rechazó la demanda reconvenicional, sin costas.

Se alzó la parte demandante reconvenicional y una de las salas de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, por fallo de siete de julio de dos mil nueve, escrito a fojas 58 y siguientes, revocó la sentencia de primer grado, sin costas, declarando que se accede a la demanda reconvenicional de compensación económica debiendo pagar don Orlando Antonio Contreras Valencia a doña Hermelinda Amalia Garrido Vilche, la suma equivalente a sesenta ingresos mínimos mensuales.

En contra de esta última resolución, don Orlando Antonio Contreras Valencia, recurre de casación en el fondo, por haberse dictado, a su juicio, con infracciones de ley que influyeron en su parte dispositiva, solicitando se invalide la sentencia y se dicte la de reemplazo que describe.

Se trajeron estos autos en relación.

Considerando:

Primero: Que el recurrente denuncia el quebrantamiento de los artículos 61 y 62 de la Ley de Matrimonio Civil; 1698 del Código Civil.; y 19 N° 2 de la Constitución Política de la República. Respecto del artículo 61 antes referido se sostiene, luego de reproducirlo, que fue aplicado erróneamente al acogerse la demanda sin que se acreditaran los requisitos de

procedencia de la compensación económica establecidos en la norma referida, esto es, que la demandante reconvenional se haya dedicado al cuidado de su hija y a las labores propias del hogar común, y que como consecuencia de lo anterior, no haya podido desarrollar una actividad remunerada o lucrativa, durante el matrimonio o lo hubiese hecho en menor medida de lo que podía o quería.

En cuanto al artículo 62 de la Ley de Matrimonio Civil, señala el recurrente que el error de derecho se produce por cuanto se le concedió a la demandante reconvenional la compensación económica que solicitó, a pesar que no se acreditó el menoscabo exigido por la norma citada.

Respecto del artículo 1698 del Código Civil, señala que los jueces del fondo dejaron de aplicarlo, toda vez que eximieron a la demandante reconvenional de la carga de la prueba, ya que era ésta quien debía acreditar los fundamentos de hecho de su solicitud y pese a que no lo hizo, se le acogió la demanda.

En cuanto al artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, este se estima vulnerado, porque según el recurrente se establecieron diferencias arbitrarias entre las partes del juicio, favoreciéndose a la demandante reconvenional por el solo hecho de ser mujer.

A lo largo del recurso y como sustento de los diversos capítulos del mismo, el demandado reconvenional afirma que se acreditaron en el proceso los siguientes hechos: que fue él quien se dedicó al cuidado de su hija, tanto durante la convivencia con su cónyuge, como después del cese de la misma, consecuencia del abandono del que fue objeto en el año 1998; que jamás la demandante reconvenional ha demostrado interés por desarrollar una actividad lucrativa, no obstante no sufrir ninguna enfermedad invalidante; que el demandado ha mantenido a la demandante durante diez años, pese a que ésta lo abandonó dejándolo al cuidado de la hija, a la que él sacó adelante por si solo; que durante la convivencia la demandante reconvenional se ausentaba por largos periodos del hogar común; y que ésta nunca le proporcionó alimentos y cuidados personales a la hija común.

Segundo: Que son hechos establecidos en la sentencia impugnada:

- a) Las partes del juicio se casaron el 7 de junio de 1973, cuando Hermelinda Amalia Garrido Vilche tenía 18 años, tuvieron una hija que nació el 24 de febrero de 1981 y la convivencia terminó en el año 1998.
- b) La demandante reconvenional se dedicó a las labores del hogar común y al cuidado de su hija, a quien crió, hasta que ésta cumplió 17 años de edad, brindándole formación y educación.
- c) El demandado reconvenional trabajó durante todo el tiempo que duró la convivencia.
- d) La demandante de compensación económica obtuvo pensión de alimentos de su marido en el año 1999.

e) La demandante, producto del matrimonio sufrió un desgaste y deterioro en su desarrollo personal que le impidió obtener conocimientos y destrezas al no poder continuar con sus estudios y perfeccionarse; tampoco pudo fortalecer su capacidad intelectual, todo lo cual le impidió acceder a un trabajo remunerado y trajo como consecuencia un menoscabo económico.

f) Las enfermedades que habría padecido la cónyuge demandante reconventional no son demostrativas de impedimento permanente o invalidante, sino reflejan los padecimientos normales que puede experimentar una familia, aunque esto implique ausentarse esporádicamente del hogar.

Tercero: Que sobre la base de los hechos descritos en el motivo anterior, los sentenciadores decidieron acoger la demanda reconventional, y condenar al demandado al pago, por concepto de compensación económica, de una suma de dinero equivalente a sesenta ingresos mínimos mensuales.

Cuarto: Que del tenor de lo dispuesto en los artículos 61 y 62 de la Ley de Matrimonio Civil aparece que para que proceda la compensación económica de que se trata resulta necesario que el cónyuge que la solicita, como consecuencia de haberse dedicado durante los años de convivencia al cuidado de los hijos o a las labores propias del hogar común, no haya podido desarrollar una actividad remunerada o lucrativa durante, el matrimonio o lo haya hecho en menor medida de lo que podía y quería, todo lo cual debe derivar en un menoscabo económico.

Quinto: Que, mediante la interposición del recurso de casación en el fondo, el demandado reconventional pretende se rechace la demandada de compensación económica por no reunirse en la especie los requisitos de hecho exigidos por la ley para su procedencia, y porque además, se acreditó en el proceso, entre otras circunstancias, que fue él quien se dedicó al cuidado de su hija, tanto durante la convivencia con su cónyuge, como después del cese de la misma, producto del abandono del que fue objeto en el año 1998; que jamás la demandante reconventional ha demostrado interés por desarrollar una actividad lucrativa; que el demandado ha mantenido a la demandante reconventional durante diez años, pese a que lo abandono dejándolo al cuidado de la hija, a la que sacó adelante por sí solo; que durante la convivencia la demandante reconventional se ausentaba por largos periodos del hogar común; y que ésta nunca le proporcionó alimentos y cuidados personales a la hija en común.

Sexto: Que de la lectura de los hechos reseñados en el considerando tercero que antecede aparece que los jueces del fondo, en primer lugar, dieron por acreditados todos y cada uno de los presupuestos fácticos establecidos por la ley como requisitos de procedencia de la compensación económica motivo de la sentencia que se revisa; y en segundo término que no dieron por acreditados los hechos, sobre los cuales se sustenta el recurso, ya particularizados en el motivo anterior.

Séptimo: Que de lo razonado precedentemente se desprende que el recurso se construye en contra de los hechos de la sentencia y sobre la base de presupuestos fácticos no establecidos en ella, sin que se denuncie infracción a las normas reguladoras de la prueba propias de la

materia, esto es, el artículo 32 de la Ley 19.968, lo que impide a esta Corte entrar a analizar las infracciones de derecho alegadas, toda vez que la interpretación de ley sostenida por el recurrente se contrapone a los hechos fijados en la sentencia y supone, además la existencia de presupuestos fácticos no establecidos en ella, por todo lo cual deberá rechazarse el recurso.

Octavo: Que no obsta lo anterior, que el recurrente exprese que en el fallo se infringieron las reglas de la sana crítica, por contradecir éste la prueba rendida en autos y los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, en atención a que estas alegaciones no hacen referencia precisa al artículo 32 antes referido, y porque el fundamento reproducido constituye una mera afirmación, sin un desarrollo argumental que la justifique, ya que se omite señalar en forma precisa y determinada de que manera los jueces del grado habría infringido los principios que invoca.

Noveno: Que, en consecuencia, el recurso de casación en el fondo deducido por la demandada reconvencional debe ser desestimado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 67 de la Ley 19.968 y 764, 765, 767, 771, 772 y 783 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casación en el fondo interpuesto por el demandado reconvencional don Orlando Antonio Contreras Valencia, a fojas 62, contra la sentencia de siete de julio de dos mil nueve, que se lee a fojas 58 y siguientes.

Redacción a cargo del Ministro Suplente señor Julio Torres Allú.

Regístrese y devuélvase con sus agregados.

Pronunciada por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Patricio Valdés A., señora Rosa María Maggi D., Ministro Suplente señor Julio Torres A., y los Abogados Integrantes señores Roberto Jacob Ch., y Ricardo Peralta V. No firma el Abogado Integrante señor Jacob, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa por estar ausente. Santiago, 07 de septiembre de 2009.

Autoriza la Secretaria Subrogante de la Corte Suprema, señor Carola Herrera Brummer.

Rol N° 5.706-09.